

2.15. LOS SINDICATOS DE LA CARRETERA CENTRAL: ENTRE EL RADICALISMO O LA RESIGNACIÓN

Durante los últimos años de la década del 80 y los primeros del 90, al ritmo de una intensa presencia en Lima Metropolitana, el PCP-SL y, en menor medida, el MRTA, parecían expandirse de manera vertiginosa entre los sindicatos. Era previsible que así sucediera. A estas alturas el fenómeno subversivo empezaba a afectar a casi todas las dimensiones de la vida nacional y el sector laboral no podía quedar de lado, más aún cuando Abimael Guzmán y otros dirigentes de su partido habían trazado ya las líneas matrices que debían conducir la guerra popular a partir de 1988, cuando las urbes adquirirían importancia y, en consecuencia, el movimiento sindical debía ser un mecanismo crucial para sus acciones.

No era un esquema novedoso: había sido habitual que la izquierda legal utilizara a los sindicatos como correas de transmisión de sus objetivos políticos, cuestión importante para entender el desarrollo de una concepción clasista en el sindicalismo peruano que, en la medida que estos partidos empezaron a mostrar inequívocos síntomas de desestructuración, adquirió altos grados de autonomía que en muchas oportunidades actuaba en contraposición a las consignas partidarias; en cambio el PCP-SL, que trató de arraigar apelando precisamente a esta tradición, trató de reproducir escenarios anteriores, pretendiendo subordinar la actividad gremial exclusivamente a sus propios fines, conduciéndola a un extremismo inédito, aprovechando la coyuntura singular de la crisis industrial que a fines de los 80 había afectado la organización de los sindicatos más combativos y radicales, y las graves dificultades que tenían las organizaciones de izquierda para crear mecanismos de contención —y de manera amplia— articular un proyecto nacional.

El sindicalismo clasista había nacido y crecido bajo un patrón de acumulación económica determinado por las políticas de sustitución de importaciones que hacia los años 80 manifestaba claros signos de agotamiento, facilitando el cambio hacia una economía más abierta y, finalmente, la implantación de un modelo neo-liberal. Esta circunstancia trajo como consecuencia la descapitalización del sector industrial, la reducción de personal, el cierre de turnos y la paralización de la producción, mientras el Estado se retraía de intervenir en los conflictos laborales alentando los mecanismos de consenso que podían construir entre sí los sectores laboral y empresarial. En este escenario no era muy fácil que las organizaciones gremiales negociasen exitosamente sus demandas para atenuar los altos índices de inflación y la pérdida de poder adquisitivo, como demuestran los modestos resultados de sus protestas masivas. Por lo demás, se mantenía el enfrentamiento entre las diversas federaciones, pese a los esfuerzos centralizadores.

Otro factor importante fue que los partidos de izquierda, después de incrementar apreciablemente su espacio político, con las luchas sindicales de los años 70 y su protagonismo en la caída del régimen militar (1968-1980), trasladó su atención hacia los ámbitos barrial y municipal, algo que los dirigentes obreros interpretaron como un «abandono» a los trabajadores, aunque, como contraparte, ya lo señalamos, aumentó su autonomía funcional y las tendencias caudillistas encontraron terrenos más propicios para su reproducción (en realidad nunca dejaron de manifestarse).

En segundo lugar, y como correlato de lo anterior, si bien se esperaba que los partidos de la izquierda se convirtieran en voceros políticos del movimiento sindical, lo cierto es que esto no fue todo lo eficaz que se esperaba y las limitaciones de los partidos hizo inexistente una adecuada intermediación política que, dada la naturaleza de los conflictos, resultaba indispensable.

En suma, el PCP-SL intentó radicalizar las luchas de los sindicatos ubicados a lo largo de la carretera Central, justificando sus acciones mediante el supuesto «abandono» del clasismo que hicieron los dirigentes identificados con los partidos de la izquierda legal y, bajo estas premisas, llevaron a cabo acciones de destrucción de infraestructura, como fue el caso de Nissan, influyeron en las manifestaciones más violentas de protesta sindical –como fueron los casos de Papelera Atlas, Manylsa, COPE, Carbolán, entre otros-, intentaron organizar un organismo de centralización sindical local (la Coordinadora de Lucha de Obreros y Trabajadores Clasistas de la Carretera Central —CLOTCC—), asesinaron dirigentes sindicales (como Enrique Castilla de Tejidos La Unión) y una serie de funcionarios, así como el impulso dado a diversos «paros armados». Los resultados fueron catastróficos para un movimiento obrero que estaba en una situación de reflujo, ocasionando la formación de una resistencia muy grande a los intentos de penetración del senderismo, aunque en perspectiva sirvió al PCP-SL para entrenar a algunos cuadros partidarios que luego veremos participando en el movimiento barrial de Ate-Vitarte.

2.15.1. Entre el colapso económico y la violencia política

Pasados los efectos de una recuperación intentada por el lado heterodoxo, durante el gobierno de Alan García (1985-1990), el reajuste económico sobrevino en 1990 demoliendo la capacidad adquisitiva de los trabajadores y las posibilidades de empleo medianamente remunerado. Sus efectos durarían hasta 1993. Entre 1984 y 1993 el sector informal del empleo urbano aumentó del 35% al 45%. En el mismo periodo el desempleo abierto aumentó del 8.9% al 9.9%, lo que significó que el «índice de precariedad laboral»(personas con problemas de empleo) aumentara del 50.5% al 58.7% y que el subempleo se constituyera en la actividad mayor (70.7%) entre los asalariados¹.

¹ Ricardo Infante: «Perú. Ajuste del mercado laboral urbano y sus efectos sociales: evolución y políticas». Oficina Regional de la OIT para América Latina y El Caribe. Lima, 1995.

Eso no fue todo. Como afirma Infante (1995), la intensificación de contratos de trabajo, que pasaron de permanentes a eventuales, como resultado de las modificaciones en la legislación laboral, afectó enormemente el poder adquisitivo de los trabajadores. A su vez, entre los años en mención hubo un crecimiento persistente de la oferta laboral, pero el sector moderno de la economía no generó empleo suficiente, debido en gran parte al comportamiento de las grandes empresas (con más de cien trabajadores), que se contrajeron al ritmo del 1.6% anual entre 1984 y 1990, con lo cual su participación en el empleo privado se redujo del 37.1% al 26.2%.

Esto contrastaba con el comportamiento de las empresas pequeñas (10 a 19 trabajadores) y medianas (20 a 100 trabajadores), cuyos niveles de ocupación se expandieron entre un 8.3% y un 7.1% en el periodo mencionado, pasando a sustentar la generación de empleos en el sector moderno privado, lo que además de afectar a los trabajadores también disminuía las utilidades de las empresas. Por otro lado, la poca flexibilidad de los niveles de empleo en el sector moderno condujo a una disminución de la productividad del trabajo, pero fue contrarrestada con creces por la fuerte reducción de los salarios reales, el deterioro del tipo de cambio, las bajas tarifas de los servicios públicos y los subsidios arancelarios. Se puede afirmar, con un alto grado de probabilidad, de que el margen total de ganancias en el sector moderno no solo se mantuvo, sino que aumentó hacia finales del periodo en mención, mientras que su participación en la ocupación urbana total se redujo del 38.8% en 1984 al 36.7% en 1990.

Una situación tan crítica determinó que los trabajadores volvieran a convocar paros nacionales, algo que no se presentaba desde 1984. El primero de ellos fue 19 de mayo de 1987 y su éxito en buena cuenta dependió de la coincidencia de un paro policial. El siguiente se llevaría a cabo el 28 de enero de 1988, esta vez convocado por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP),² y la Asamblea Nacional Popular (ANP), durante el cual las direcciones sindicales y políticas de izquierda deslindaron y se enfrentaron con el PCP-SL. El mismo año se convocaron dos paros más (19-20 de julio y 13 de octubre), y en ellos también se volvieron a expresar tajantes diferencias con el senderismo.

El PCP-SL no era un actor reciente en el movimiento laboral. Ya en los 70 había generado el Movimiento Obrero de Trabajadores Clasistas (MOTC), cuyo objetivo era articular al *Partido* con los trabajadores urbanos, aunque en la práctica no tuvo presencia entre las masas sindicalizadas, sino más bien entre ambulantes e informales. Quizá por eso se oponía a los paros, tildándolos de «revisionistas», por el solo hecho de que su conducción estaba en manos de la

2 La CGTP se había refundado en 1968, luego de una larga lucha para reorientar el movimiento obrero hacia posiciones clasistas. Los años inmediatamente posteriores, hasta 1975, sobrevino la mejor etapa para el sindicalismo peruano bajo la vigencia del Decreto Ley 18471 de estabilidad laboral, que permitió la aparición de una cantidad de sindicatos nunca vista hasta el momento. Esto fue acompañado por el uso generalizado de medidas radicales, como la huelga y las tomas de instalaciones como formas de lucha con los sectores empresariales y el Estado. Esta tradición sindical prolongó su vigencia hasta los años 80, cuando debido a la crisis económica y los canales de negociación abiertos muy tenuemente por el régimen democrático, hizo que los dirigentes consideraran otras formas de negociación, menos confrontacional. Aún así, cuando las conversaciones fracasaron y los convenios no fueron cumplidos, las centrales obreras, especialmente la CGTP, consideró que volver a las convocatorias de paros nacionales podían ser eficaces como formas de presión.

CGTP. En los años siguientes organizó una escuela sindical entre los mineros de Cerro de Pasco, con la intención de captar y formar cuadros, pero aparentemente no le fue bien, perdiendo notoriedad en ese ámbito hasta mediados de los 80 cuando reaparece empleando otras modalidades tácticas. Es probable que desde esta época fueran integrando y educando a los trabajadores que años después dirigirían los atentados perpetrados en este sector.

2.15.2. Incendiando la ciudad

El paro nacional de mayo de 1987 se realizó cuando aún la reactivación económica se reflejaba en sorprendentes tasas de crecimiento en el sector industrial y en una significativa recuperación del salario real (24.2% para 1986 y 45% para 1987). Podría parecer contradictorio que frente a esa situación los trabajadores reaccionasen protestando, pero el establecimiento de topes salariales, en momentos que se daba un crecimiento de las utilidades de las empresas, los hacía sentirse excluidos del modelo político y económico. Por lo demás, hacia fines del mismo año ya era evidente que la política económica, implementada durante los dos primeros años de gobierno aprista, era insostenible. En diciembre se inicia una serie de devaluaciones que inciden sobre el costo de vida de la población y motiva la convocatoria de otro paro nacional, en enero de 1988.

Lo peor aún estaba por venir. A mediados de ese año se pone fin al control de cambios y se acelera la devaluación, generando mayor inflación y la caída de los ingresos reales. El sindicalismo reaccionó convocando otro paro (el 19 de julio), a sólo seis meses del anterior, aunque no logró repetir sus resultados. En setiembre sobrevino el *paquetazo* que llevó la inflación al 114%, haciendo que los salarios reales vuelvan al nivel de 1985, con lo cual la población perdió todo lo que había recuperado en los años anteriores.

La CGTP volvió a llamar a un paro nacional en octubre y otro más en diciembre. El primero resultó bastante débil y el segundo fue un fracaso. La recesión, la pérdida de poder adquisitivo y la hiperinflación minaban la voluntad de lucha de los trabajadores conduciéndolos a una actitud conservadora, contra las previsiones de la dirigencia que creía que iba a impulsarlos a una mayor protesta. Temerosos de perderlo todo, los trabajadores preferían garantizar sus ingresos antes que arriesgarlo en una medida que solo manifestaba su descontento. Era innegable, por otra parte, que el ambiente se enturbiaba y las acusaciones de «terrorismo» estaban a la orden del día ante cualquier manifestación de protesta.

En este contexto ocurrió un hecho importante durante el paro de octubre. La policía allanó el local de la Federación de Luz y Fuerza, llevándose detenidos a tres dirigentes y un trabajador — el Secretario General, el Secretario General de la sección norte, el Secretario de Relaciones Exteriores y el portero del local— a quienes acusó de terroristas. Como pruebas, la policía mostró volantes del PCP-SL, cartuchos de dinamita, llantas y explosivos que, según su versión, había encontrado en el referido lugar. El secretario de defensa de la Federación, Noé Rospigliosi, reveló

que esas pruebas habían sido *sembradas* por los efectivos policiales, denunciando además que su organización había sido objeto de un robo de 400 mil intis y destrucción de computadoras, equipos telefónicos, máquinas de escribir, equipos de amplificación y calculadoras.

Desde hacía un tiempo la Federación de Luz y Fuerza estaba en la mira de las fuerzas del orden debido a los constantes sabotajes en las líneas de tendido eléctrico, atribuyéndole que algunos de sus agremiados proporcionaban información para que el PCP-SL, que al parecer había infiltrado Electro Lima y Electro Perú, realizara sus atentados.³ Esta sospecha se reforzaba además porque la dirigencia mantenía una línea crítica a la dirección de la CGTP.⁴

Durante 1989 este cuadro se agudizó, aunque algunos cambios de actitud se manifestaban entre los dirigentes obreros. Hasta ese momento las respuestas obedecían a un uso intensivo del único recurso con que contaban, es decir las huelgas y tomas de instalaciones, pero cada vez se mostraban más ineficaces. Frente a la recesión, la reducción de las jornadas de trabajo o los cierres temporales de las plantas de producción sólo quedaba la negociación pragmática, confiando en el diálogo antes que en la confrontación. El despido y cese masivo de sindicalizados, su reemplazo por eventuales y personal acogidos en el PROEM, así como la sistemática reducción de los salarios reales, no vislumbraban otra alternativa.

Tampoco era ya apropiado, como lo fue en el primer quinquenio de los 80, promover la centralización sindical, buscando movilizar la solidaridad de clase para darle mayor fuerza a las reivindicaciones. Lo que se impuso fue más bien la negociación en cada empresa que dependía de la capacidad que tuvieran los sindicatos.

La prioridad que adquirió la lucha salarial fortaleció la vida sindical. 1988 fue el año de la más violenta caída salarial que registró la historia (hasta ese momento), pero también el de mayor intensidad huelguística. Lo que se buscaba era eliminar los topes salariales y presionar para que los ingresos se recuperasen frente al proceso inflacionario. La movilización de sectores íntegros, como bancarios y textiles, exigiendo la anulación del D.S. 041⁵: una gran cantidad de paros y huelgas buscó preservar los niveles de los salarios, algo que fue visto como un derecho adquirido.

3 Desde 1985 hasta mayo de 1989 fueron derribadas 592 torres de alta tensión. En esos cuatro años, Electro Perú tuvo una pérdida de 68 millones de dólares por acciones terroristas.

4 Casi un año después, en agosto de 1989, cuando los sindicatos de Electro Lima y Electro Perú presentaban su pliego de reclamos, el director de la PT, Gral. Fernando Reyes, reiteró estas afirmaciones.

LA DÉCADA DE LOS 80 EN CIFRAS⁶

Sueldos

Años	Nominal (Mensual)	Real (Mensual)	Índice de sueldo real
1980	68.24	42.87	107.4
1981	121.74	43.60	109.2
1982	216.02	47.05	117.8
1983	391.12	40.34	101.0
1984	758.03	37.20	93.2
1985	1,840.89	34.29	85.9
1986	4,766.96	49.91	125.0
1987	9,272.99	52.24	130.8
1988	49,419.63	36.19	90.6
1989	1'083,541.83	22.68	56.8

Fuente: MTPS-DGE

Salarios

Años	Nominal (diario)	Real (diario)	Índice de salario real
1980	1.51	0.95	105.8
1981	2.59	0.93	103.6
1982	4.32	0.94	105.0
1983	7.56	0.78	86.8
1984	13.55	0.67	74.1
1985	30.82	0.57	64.0
1986	80.00	0.84	82.8
1987	161.37	0.91	101.0
1988	814.35	0.60	66.3
1989	18,593.76	0.39	43.2

Fuente: MTPS-DGE

Emilio Calla, secretario de Prensa y Propaganda de la FETIMP, señalaba lo siguiente:

La recesión nos ha afectado desde septiembre. En este momento la empresa no está produciendo nada; desde el 24 de abril ya no se produce ni una pila. La empresa tiene además una cantidad de stock, y en este momento no tiene mucha demanda.⁸

2.15.3. El pez que se toma el agua

Este título fue propuesto por Carmen Vildoso y Denis Sulmont para graficar la acción del PCP-SL en los sindicatos.⁹ En efecto, luego del primer congreso senderista, en 1987, las directivas sobre

5 El decreto supremo 041 anulaba lo dispuesto por el decreto legislativo 025, de agosto de 1988, que establecía indexaciones salariales aunque con topes.

6 José Reyes: «La década en cifras». En *Cuadernos Laborales* 57. Adec-Atec. Lima, febrero - marzo 1990

7 «Entrevista con Enrique Castilla». *Quehacer* 59. DESCO. Lima, junio-julio 1989.

8 Carmen Rosa Balbi: «La recesión silenciosa. Estrategias obreras». En *Quehacer* 59. DESCO. Lima, junio-julio 1989.

9 Carmen Vildoso y Denis Sulmont: «Sendero Luminoso y la clase trabajadora: el pez que se toma el agua». En Denis Sulmont y otros: «Violencia y movimiento sindical». Red Peruana de Educación Popular y Sindicalismo. Lima, 1989.

qué hacer en las ciudades eran claras. Bajo la premisa de «conquistar bases» Sendero definió la necesidad de crear en las ciudades: «El Movimiento Revolucionario de Defensa del Pueblo (MRDP), con centros de resistencia que hacen la guerra popular y preparan la futura insurrección, que se dará cuando las fuerzas del campo asalten las ciudades en combinación con la insurrección desde dentro».¹⁰

El MRDP estaría conformado por «organismos autogenerados», semiclandestinos, que ligarían el partido con las masas y realizarían su trabajo frontal en sindicatos, federaciones, asociaciones de comedores populares, barrios, universidades, etc. En el caso de los sindicatos, se asignaba al MOTC la responsabilidad de las tareas descritas.

Hacia 1987 era común que los senderistas realizaran una intensa labor de volanteo en las puertas de las fábricas lanzando arengas a favor de su organización. Pero el desarrollo del «gran plan de conquistar bases de apoyo» en las ciudades implicaba algo más que estas tareas de propaganda como la destrucción de la infraestructura de las fábricas que se encontraban en conflictos laborales, tal el caso de Nylon, Bata-Rímac, Nissan y otras. Asimismo, procedieron a ejecutar a funcionarios de empresas. En marzo de 1988, mientras el sindicato de la empresa COPE, ubicada en la carretera Central, se aprestaba a discutir su pliego de reclamos, una mujer asesinó al gerente de relaciones industriales¹¹. Luego, al lograr el control de la situación mediante amenazas, los senderistas decretaron una huelga general indefinida con toma de las instalaciones¹². Después de cincuenta días, hubo un violento desalojo, los dirigentes fueron despedidos, el sindicato descabezado y los trabajadores no consiguieron que se les atendiera en alguno de sus reclamos.

De igual manera, en abril de 1988 un grupo de senderistas que se hallaba confundido entre los trabajadores en huelga, hiere mortalmente al gerente de la fábrica Hilados S.A. Los trabajadores los rechazarlos auxiliando a la persona herida. Sin embargo, pocos días después (12 de abril), el vocero senderista, El Diario, señalaba lo «correcto» de la acción.

El PCP-SL no sólo seleccionaba a sus enemigos según un *criterio de clase*, sino también según la resistencia que le ofrecían otras agrupaciones políticas de izquierda que le disputaban espacio en los sindicatos, apostrofándolas de «revisionistas». El paro nacional de enero de 1988, convocado por la CGTP, fue la ocasión escogida para forzar su radicalización, intentando aislar a los dirigentes y conducir al movimiento sindical de la capital. Más grave aún: el día del paro (28 de enero), algunos de sus militantes se infiltraron encapuchados en la marcha, que se realizaba en la plaza Dos de Mayo, y luego pretendieron dinamitar el local de la CGTP y asesinar al líder del

10 Luis Arce Borja (ed.): «Guerra popular en el Perú: el pensamiento Gonzalo». Luis Arce Borja. Bruselas, 1989.

11 COPE producía tubos colapsibles para pasta dental, envases para productos alimenticios y envases de plástico y hojalata para lubricantes. Era una fábrica única en su género en el país y su rentabilidad era tan alta como en las cervecerías Cristal y Pilsen.

12 Los trabajadores de COPE tomaron la fábrica en lucha por su pliego de reclamos y por el nombramiento de los contratados. Como podrá notarse, el planteamiento era similar al propuesto por la CLOTCCC (Comité de Lucha de Obreros y Trabajadores Clasistas de la Carretera Central)

Partido Comunista, Jorge del Prado, lo que desencadenó una balacera que terminó con la huida de los provocadores.

Desde ese momento modificará su táctica creando *bases propias* que respondieran a situaciones específicas. Por ejemplo, en mayo de 1988, luego de un trabajo de infiltración, convocó a unos 100 «delegados» de diversas bases gremiales del cono este de Lima, reuniéndolos en Ñaña para participar en el denominado «Primer Plenario de Trabajadores Clasistas de la Carretera Central» y conformando el Comité de Lucha de Obreros y Trabajadores Clasistas de la Carretera Central (CLOTCCC). Paralelamente, apareció en la zona una base del Movimiento Revolucionario de Defensa del Pueblo (MRDP), utilizándola como aparato para lanzar una lucha frontal en sindicatos que se encontraban en conflicto con las empresas, como las ya mencionadas Nylon, COPE y Bata, además de FAM, Atlas, Tabacalera Nacional, Tejidos La Unión, Carbolán (Pelikan), entre otras.

Según *El Diario*, la constitución del CLOTCCC fue un «hito histórico... que se diferenció marcadamente de las [organizaciones] que acostumbran organizar los revisionistas, oportunistas de Izquierda Unida y el Apra fascista».¹³ Goyo Moscoso, de Papelera Atlas y presidente de la Comisión Organizadora, afirmó que «nuestro objetivo es centralizar a las masas trabajadoras dotándolas de una organización de nuevo tipo acorde a la coyuntura actual, en otras palabras poner lo organizativo en función de la toma del poder». Al finalizar el evento, Moscoso sería ratificado como presidente de la mesa directiva.

El manifiesto de fundación del CLOTCCC, publicado a toda página por *El Diario*, en su edición del 29 de mayo de 1988, fue muy claro sobre las intenciones del PCP-SL en el sindicalismo. El texto se abre con una cita de Marx: «La clase obrera es revolucionaria o no es nada. La conquista del poder político ha devenido a ser, por lo tanto, el gran deber de la clase obrera». Su plataforma consistía de nueve puntos, entre los que resaltaban exigencias al gobierno aprista, «fascista y corporativo encabezado por el demagogo García», de pliegos renovables en lugar de los anuales, con lo cual el PCP-SL estimaba que podía garantizar una situación de enfrentamiento permanente, «teniendo en cuenta que sólo se conquistan derechos y beneficios con lucha y se defienden con lucha, ya que el problema se reduce a las fuerzas respectivas de los contendientes». En segundo lugar, presentaron otras demandas como aumento de salario de 500 intis diarios, reducción de la jornada de trabajo, mejores condiciones laborales, mayor atención médica y el cumplimiento de pactos y convenios colectivos. Finalmente, establecieron como bandera de lucha la estabilidad laboral para los eventuales y personal de PROEM, así como «la defensa de los sindicatos de clase, contra el paralelismo corporativo». También incluían mejores condiciones de trabajo para las mujeres y niños.

13 «Preparar a las masas para la toma del poder». En *El Diario*, domingo, 27 de marzo de 1988.

Según se deduce de este texto, el PCP-SL aspiraba a desarrollar entre los obreros la idea de que sus reivindicaciones no podían ser atendidas bajo la situación imperante y que la única salida era la *guerra popular* que estaba impulsando. De otra forma, parece ilógico asumir, por ejemplo, que la demanda de darle estabilidad a los eventuales pudiera ser escuchada por las autoridades de trabajo.

Hubo, al parecer, varios motivos para que el PCP-SL realice estos ajustes organizativos. En primer lugar, como se afirmó en los estudios elaborados sobre Huaycán y Raucana,¹⁴ la carretera Central fue considerada por el PCP-SL como prioritaria para su trabajo político, debido a sus características socio-económicas. En segundo lugar, al ser una zona eminentemente industrial era razonable pensar que la crisis del sector impactaría allí de manera importante; como tercer punto, en Ate-Vitarte existía una fuerte tradición del sindicalismo radical; por último, se suponía que no había mayores distancias entre trabajadores y pobladores —los residentes en la zona eran mayoritariamente los obreros que laboraban en las fábricas allí asentadas— y, en teoría, esto facilitaría la articulación del movimiento sindical con el barrial. Si ese fue el razonamiento senderista, entonces tuvo un clamoroso error de apreciación. Por todas las consideraciones que hemos venido exponiendo, la acción sindical no podía ejercerse con el simple expediente de la confrontación y muchos de los dirigentes de esta zona así lo entendieron.

Al procesar el sector industrial una profunda crisis terminal, los dirigentes de izquierda estimaron que mucho mejor provecho tendrían las negociaciones con los empresarios que las confrontaciones directas que sólo acelerarían una situación en las que los obreros podrían salir muy perjudicados.

Por otro lado, las nuevas modalidades de reclutamiento laboral afectaron de manera decisiva la organización sindical. La masa de trabajadores residente en el distrito, paulatinamente se fue diversificando con obreros que provenían de otros lugares, como los conos sur y norte, que difícilmente se integraban a la dinámica de los pobladores del lugar¹⁵. Las dificultades para el senderismo no se hicieron esperar. Al hecho de que veía a los sindicatos como parte de un engranaje que reforzaba los objetivos del partido, se sumó una clamorosa ausencia de representación. Goyo Moscoso, secretario general de Papelera Atlas y presidente del CLOTCCC, se quejaba en 1991 de que

[...] el Comité de Lucha de la Carretera Central no funciona hasta el momento. Hace ya tres años se hizo el plenario. Aquí en la carretera Central lo formaron los compañeros que se llaman del Partido Comunista Peruano bajo el lema de SL, pero desde ese día hasta hoy, ni un comunicado, ni una reunión, ni una coordinación. ¿Quiénes son? ... Solamente son voces que hablan, pero al final desaparecen, no se les conoce de qué base son.¹⁶

14 Véanse capítulos sobre Huaycán y Raucana.

15 Marina Irigoyen: «Ate-Vitarte, industria y movimiento sindical: 1975-1984». *Ideas*. Lima, 1985.

Un ejemplo palpable de cómo conducía el senderismo los asuntos sindicales fue Nylon S.A. Era una empresa relativamente antigua —fundada en 1961—, cuyo principal accionista era Benjamín Sabal. Entre 1974 y 1975 él decidió ampliar el negocio, haciendo una cuantiosa inversión, pero el proyecto se truncó por algunos problemas entre los accionistas dejando como pasivo una deuda de ocho millones de dólares avalados por el Banco Industrial del Perú (BIP). Ante la insolvencia, el BIP asumió el control de la empresa, comprando el 67% del capital social. Esta entidad se comprometió a reflotar la empresa y poner en marcha el proyecto inconcluso, pero una pésima gestión impidió el objetivo. Hacia fines de los 80, Nylon se encontraba desfinanciada y su reflotamiento era imposible. El remate público pendía sobre su destino.

Alertados de lo que denominaron «*sabotaje a la producción por parte de los funcionarios*», los trabajadores acordaron el traslado de la propiedad de la fábrica. En mayo de 1988 se dirigieron al presidente García manifestándole su deseo de comprar la planta y su rotundo rechazo al remate. Esta posición no era consensual y un grupo de trabajadores opinaba que el reflotamiento podía garantizarse con una «*pronta gestión privada*», tal como expresaron en un comunicado publicado en El Comercio el 29 de septiembre de 1988. En el centro mismo de las diferencias estaba el asunto de la estabilidad laboral. La vía propuesta por el sindicato implicaba su defensa, algo que no se garantizaba si la empresa pasaba a manos privadas.

¿Cuál fue la posición de los trabajadores senderistas? Según Carmen Vildoso, oscilaron entre

La indiferencia frente a la posible venta de MANYLSA, asumiendo que son los empresarios privados y no los trabajadores quienes deben preocuparse de los problemas de la empresa, y la propuesta de luchar por la administración del centro de trabajo, ‘siguiendo el ejemplo de los compañeros de COPE, que han tomado la fábrica.’¹⁷

COPE fue otro ejemplo muy claro. Al igual que Nylon, la Compañía Peruana de Envases era una empresa antigua -tenía 37 años de existencia- donde trabajaban más de 300 personas y cuyos principales accionistas eran las familias Rodríguez-Mariátegui y Ratto Divinich. El conflicto empezó a agudizarse cuando los propietarios decidieron dar vacaciones al personal ante la falta de demanda de sus productos y con la esperanza de que éstos recuperaran sus precios en un plazo indeterminado. Entonces la Comunidad Industrial y los sindicatos de obreros y empleados conformaron un Frente Único, tomando la fábrica el 11 de abril de 1988. Entre tanto, el PCP-SL asesinó al gerente de relaciones industriales.

Los dirigentes laborales denunciaron que los propietarios de COPE estaban trasladando la materia prima de los depósitos a otra empresa que habían formado bajo la razón social de Envases

16 «En el filo de la navaja; habla Goyo Moscoso, secretario general de Papelera Atlas». En *Quehacer* 68. DESCO. Lima diciembre 1990-enero 1991.

17 Carmen Vildoso: «Manufacturas Nylon, un desafío a la cogestión». *EDAPROSPO*. Lima, 1991.

Varios, ubicada en Chorrillos, incorporando su cartera de clientes y canalizando las utilidades hacia las empresas de servicios ARASA, MOSA y ATUR, de su propiedad, con lo cual obviamente descapitalizaban a COPE.

El punto de vista de los empresarios era diferente. En un aviso pagado, publicado en el diario *El Comercio* el domingo 17 de abril de 1988 (y reproducido luego por los semanarios *Caretas* y *Sí*), argumentaban que la toma de la fábrica, manejada por grupos extremistas, era la causa del incumplimiento a los clientes. Un mes después, el 23 de mayo de 1988, durante una reunión convocada por la Comisión de Pacificación del Senado de la República, el señor Luis Rodríguez-Mariátegui, quien asistía como representante de la CONFIEP, manifestaba que el tema de COPE era ilustrativo para evaluar la situación de la subversión en ese momento:

Esta ha sido una toma de fábrica cantada, publicada con anticipación en un plenario de trabajadores de la carretera Central [se refiere al plenario del CLOTCCC], en el cual presenta una moción el sindicato de esta misma compañía, calificando al Apra de gobierno genocida y corporativo, Izquierda Unida de capitulacionista y revisionista, con frases como: «una clase trabajadora que no aprende el manejo de las armas, sólo merece que se les llame esclavos» ... Yo diría que el problema básico es de desconcierto, no se sabe cómo actuar ... cuando se produce el día viernes la diligencia judicial para constatar la inspección ocular, la toma de la fábrica, aparecen 70 personas y son 330 los trabajadores; es decir, hay exactamente el 20% adentro. Sobre la pregunta de la capacidad de reacción de los trabajadores, yo no diría que ese 20% sean senderistas, de ninguna manera, yo creo que hay muchos que están intimidados. Se sabe que hay gente que ha sido amenazada, como entran y salen le dicen: «si tú no regresas vas a ver lo que te pasa a ti, a tu familia». O sea, se está empleando por medio de esta gente infiltrada dentro de cada uno de los sindicatos, tácticas realmente de intimidación y de presión.

Y en cuanto a la zona, yo creo que la carretera Central es la más álgida, indiscutiblemente, porque lo que hemos visto de las minas y de las mismas industrias, este comité de trabajadores clasistas tienen bases en casi todas las fábricas de la zona, funcionan al margen de los sindicatos, al margen de las propias directivas que responden a las confederaciones que actúan democrática y legítimamente, hay gente que está infiltrada por dentro y que está tratando de crecer, y creo que el momento de evitar que esto se produzca.¹⁹

Los trabajadores rechazaron cualquier relación con el PCP-SL²⁰ en un comunicado firmado por los sindicatos y la comunidad industrial, proponiendo a las autoridades que le entregasen la conducción de la empresa, dadas las dificultades de sus propietarios. Sin embargo, la duda ya estaba sembrada y los senderistas aprovecharon políticamente esta circunstancia perjudicando a los sindicalistas. Como dijimos líneas arriba, cincuenta días después de la toma serían violentamente desalojados sin lograr la atención de un solo punto de sus reclamos.

18 COPE producía tubos colapsibles para pasta dental, envases para productos alimenticios y envases de plástico y hojalata para lubricantes. Era una fábrica única en su género en el país y su rentabilidad era tan lata como en de las cervecerías Cristal y Pilsen.

19 Senado de la República: op.cit.

-

El resultado de este conflicto no interesó al PCP-SL sino acrecentar su presencia potenciando el CLOTCC, o creando el Comité de Lucha de Obreros Clasistas de la Avenida Argentina (CLOCAA), para utilizarlos en paros armados que entre 1988 y 1992 fueron escalando según sus planes de guerra:

1988

27,28 y 29 de septiembre. Paro de 72 horas en la carretera central, que coincidieron con el inicio de las acciones armadas en esa zona.

1989

19 de enero. Segundo «paro clasista» en la Av. Argentina.

20 de julio. Primer «paro armado clasista» en Lima.

03 de noviembre. Segundo «paro armado», convocado por el MRDP contra las elecciones municipales de ese mes.

1990

28 de marzo. Tercer «paro armado» en Lima. Por primera vez, el transporte público suspendió sus actividades.

28 de agosto. Cuarto «paro armado», contra el «fujishock» y que lo hicieron coincidir con el de la CGTP.

24 de octubre. Quinto «paro armado». Fue de 48 horas y no hubo transporte ni energía eléctrica.

1991

29 de mayo. Sexto «paro armado».

1992

14 de febrero. Séptimo «paro armado».

29 de mayo. Octavo «paro armado», en Canto Grande.

23 de julio. Noveno «paro armado»

Una evaluación en perspectiva nos permite afirmar que estos paros no alcanzaron los objetivos deseados por sus promotores. Los «paros armados clasistas» del 20 de julio de 1989 y del 3 de noviembre del mismo año (este último perseguía boicotear las elecciones municipales) mostraron sus escasos avances entre los gremios laborales limeños, pese a que realizaron una agresiva campaña psicológica e ideológica, especialmente contra los dirigentes de los microbuseros (envío de cartas amenazantes y presiones personales).

20 «En forma indignante algunos medios de comunicación distorsionan lucha de trabajadores de COPE». En *Kausachum* 3/2. Lima, 30 de mayo de 1988.

Dos días antes del paro de noviembre, sus militantes efectuaron una «marcha armada» como forma de propaganda y agitación. Aparentando formar parte de una manifestación de evangelistas que se había reunido en la plaza Manco Cápac, para dirigirse al cementerio El Ángel, fueron descubiertos por una patrulla policial que custodiaba el lugar -cerca de allí se hallaba el local de RBC televisión y el cuartel de Radio Patrulla-. Uno de los efectivos realizó un disparo al aire que originó el enfrentamiento con el resultado de tres sediciosos muertos, 24 personas heridas y más de 140 detenidos.²¹ Ante este hecho el gobierno dispuso que las Fuerzas Armadas se encargasen del orden interno en Lima y Callao, en el marco del Estado de Emergencia.

En las siguientes convocatorias, el PCP-SL afinó sus mecanismos de presión logrando que en varias oportunidades los transportistas prefirieran dejar de laborar ante la eventualidad de ser asesinados, por no «acatar» la medida, o destruidos sus vehículos. Asimismo, lograron incorporarlas en sus periódicas «campañas» que desataban sobre Lima, como ocurrió con el paro de febrero de 1992. Programado con una semana de anticipación, fue acompañado de acciones muy violentas que empezaron el día 7, cuando hicieron explotar una potente bomba en el local de la SUNAT, un coche bomba en la embajada norteamericana y luego de este «ablandamiento» asesinaron brutalmente a la dirigente barrial María Elena Moyano (se dice que por orden expresa de Abimael Guzmán) por la firme resistencia que les había opuesto en Villa El Salvador.

Singularmente, el vocero del PCP-SL, *El Diario*, resumió estos eventos el 21 de febrero afirmando que «la inmensa masa (casi 8 millones de habitantes en Lima), vivió la fuerza del nuevo poder a través del MRDP, la existencia del nuevo Estado, y el cuestionamiento y la negativa del viejo Estado». Luego agregaría, «los mercados, bodegas, ambulantes, universidades... permanecieron cerrados, se sujetaron a la autoridad del nuevo poder, a la convocatoria del MRDP...».

En julio repitieron el mismo esquema. Las acciones comenzaron el día 16, con el coche bomba que estalló en el jirón Tarata, de Miraflores y hostigamientos en diferentes comisarías, manteniendo la intensidad —muy superior a la de febrero— hasta el día mismo del paro. Ya en agosto, culminaría estas acciones con los asesinatos de diversos dirigentes barriales.

Dirigentes y pobladores barriales asesinados

AÑO	CANTIDAD
1984	1
1985	1
1987	4
1989	11
1990	7
1991	14
1992	24

Fuente: banco de datos, DESCO

²¹ «Sangriento enfrentamiento de policías y terroristas». En *Expreso*, Lima 2 de noviembre de 1989.

Otro de sus objetivos militares preferidos, tal como sucedió al inicio de su presencia en las plantas fabriles, eran los funcionarios que tenían a su cargo las relaciones laborales con los sindicatos. Aunque no fue muy frecuente entre 1987 y 1989, a partir de 1990 intensifica los asesinatos de manera impresionante.

1987

1ro. de octubre. Gerente de relaciones industriales de Rayón, Nelson Pozo.

1988

17 de marzo. Gerente de relaciones industriales de COPE

12 de abril. Gerente general de Hilados S.A., Brankco Pejnovil Baigm.

1990

20 de febrero. Dos funcionarios de FAMESA (Fábrica de Mechas S.A.), Juan Chacaltana y su asistente.

20 de marzo. Gerente de relaciones industriales de La Unión, Joel Podestá. En la carretera Central.

24 de marzo. Roberto Barriga, gerente de CORSA, cuando salía de su casa.

17 de abril. Pedro Muller, jefe de seguridad de Hilos Cadena S.A.

18 de abril. Manuel Sumaria, director de producción de Constructora ISSSA

02 de junio. Tomás Irigoyen, gerente de CITECIL, fábrica que se encontraba en huelga desde hacía un mes.

20 de julio. Antonio Rosales, presidente ejecutivo de Lima caucho S.A.

20 de agosto. Edmundo Aguilar, propietario de pequeña empresa Confecciones Eagle, por no pagar cupos.

27 de agosto. Jaime Navarro, gerente de relaciones industriales de FAM (Récord).

02 de noviembre. Segundo Álvarez, jefe de personal de fábrica de calzado El Diamante.

1991

28 de enero. Intento de asesinato a ejecutivo de Paramonga. Queda herido.

31 de enero. Gabriel Bonifaz, gerente de INOXA, al ingresar a la fábrica.

01 de febrero. Hernán Marco Mauricio, gerente general de procesadora de café Garci.

24 de abril. Julio Zevallos Ruiz, gerente de producción de Pesa Perú.

25 de abril. Intentan a asesinar a Alberto Nakangawa, gerente de FAMESA. Lo dejan gravemente herido.

28 de mayo. Dante Obregón, gerente de Bata Rímac. Fue emboscado y ametrallado en Chosica.

03 de junio. Galina Ivanova, funcionaria de Tejidos La Unión.

17 de junio. Armando Díaz, ejecutivo de Tejidos La Unión. Lo asesinan en la puerta de la fábrica.

1992

13 de febrero. Gonzalo García, asesor de la empresa Candados Peruanos S.A.

13 de febrero. Asesinan a subgerente de ENCI.

2.15.4. Un héroe sindical: Enrique Castilla

La misma solución aplicó contra los dirigentes sindicales que se le oponían. Sin duda, el más importante, por las connotaciones que tuvo, fue el del textil Enrique Castilla Linares. El 31 de octubre de 1989, el PCP-SL dio el mayor ejemplo de lo que era su estrategia contra el «revisonismo» (es decir, contra todos aquellos que osaran interponerse en sus planes), asesinándolo de tres balazos. Tenía entonces 48 años y representaba al típico sindicalista forjado en la tradición del clasismo. Sus adversarios le reconocían habilidad en las negociaciones y en la creación de redes de contacto, pero también le criticaban que no superase la práctica caudillista que caracterizaba a su generación. Desde 1962 trabajaba en el complejo La Unión (de lejos, la más importante en el sector textil²²), que agrupaba a doce fábricas de propiedad de la familia Brescia. Vinculado tempranamente al sindicalismo clasista, desde 1963 ya formaba parte de su dirigencia, mientras políticamente se acercó al MIR. Tres años después asumía la Secretaría General de su sindicato y como tal fue delegado ante la Federación donde tuvo que lidiar con los dirigentes apriistas.

Las reformas del gobierno militar (1968-1980) lo entusiasmaron promoviendo la comunidad industrial en su planta. Fue entonces cuando sufrió el primer atentado contra su vida. Mientras trabajaba un perfil de lo que pretendía ser la Ley de Comunidades, alguien llamó a su casa y cuando él abrió la puerta los anónimos visitantes le arrojaron una botella con ácido. Aunque la investigación quedó trunca, las sospechas mayores recayeron en los propietarios de la fábrica. Luego sufriría intentos de secuestro y atropello automovilístico.

En 1970, cuando se organiza la Unión Sindical que centralizaba a todos los sindicatos del complejo La Unión, Castilla fue designado como su Secretario General, y luego sería Presidente de la Comunidad Industrial. Después del periodo de reformas se integró al Comité de Unificación y Reorganización de la FTTP, desde donde el clasismo esperaba aislar a los apriistas de la dirección de la Federación. Asimismo, fundó la Unidad Democrática Popular y participó en el memorable paro de 1977 (que obligó al gobierno de Morales Bermúdez a convocar a elecciones para una Asamblea Constituyente al año siguiente), siendo uno de los gestores del Comité de Lucha de la Carretera Central.

²² Los datos biográficos han sido extraídos de Juan Rodríguez C.: «Enrique Castilla: nervio y corazón de dirigente». EDAPROSPRO. Lima, 1990

-

Durante los 80 lo vemos nuevamente intentando sacar a los apristas de la federación pero el sindicalismo pasaba por tiempos muy duros y la necesidad de agrupar esfuerzos lo empujó a formar parte de una dirigencia compartida. Desde allí logró crear la Unión Sindical, instancia que no era reconocida por la empresa y por eso propuso transformarla en Federación de Empresa, logrando así el aval oficial, el 23 de mayo de 1986. Como era de esperar, la empresa tampoco quiso reconocer a FEDEUNION, iniciándose una huelga que forzó a los propietarios a firmar un acta de reconocimiento, lo que los trabajadores asumieron como un gran triunfo. De poco les valdría. Dos años después (abril de 1988) la FEDEUNION iría de nuevo a la huelga, esta vez durante 84 días, porque su pliego de reclamos fue rechazado por los propietarios. Castilla demostró en este proceso la habilidad que lo caracterizaba al lograr sorprendentemente que las autoridades de trabajo reconocieran como legales los días de la paralización, sentando jurisprudencia en materia laboral.

Sin embargo, su gestión exitosa en nombre del sindicalismo era vista con sumo desagrado por el PCP-SL que tomó la decisión de asesinarlo. Eligió el «paro armado» del 3 de noviembre de 1989. Después del VIII Congreso de la Federación de Trabajadores Textiles del Perú (5-7 de octubre de 1989), durante la cual la delegación aprista tuvo que retirarse, siendo elegida una directiva clasista, con el apoyo de Castilla, él se reincorporó a su centro de trabajo siendo permanentemente amenazado con pintas en las paredes («¡Muerte al traidor Castilla!»).

La multitud que asistió a su sepelio expresó el impacto negativo de este asesinato dando inicio a un rápido y profundo desprestigio del PCP-SL, lo que, por supuesto, no pareció interesarle demasiado. Un año después, *El Diario* admitía que su muerte había sido un *error* por una mala evaluación de los plazos. En su consideración la oportunidad del asesinato debió coincidir *cuando las masas aún lo querían*.

Al eliminarlo, el PCP-SL salvó momentáneamente el principal escollo que tenía para seguir avanzando en Tejidos La Unión, la fábrica más grande del país en su sector (tenía aproximadamente 3,800 trabajadores) y, consecuentemente, un objetivo muy apreciado para sus planes. Castilla no era su único objetivo. Tal como consignamos en la lista de funcionarios asesinados, en marzo de 1990 balearon al gerente de relaciones industriales de La Unión, Joel Podestá, y en junio de 1991 corrieron la misma suerte otros dos funcionarios. Días después aparecería la siguiente pinta en una de las paredes de la planta: «muerte a los explotadores, no hay revolución sin sangre, la injusticia no quedará sin venganza y mataremos a todos los soplones».

Según el semanario *Caretas*:

David [Armando] Díaz Hinojosa ya había sido secuestrado y mantenido en calidad de rehén hasta en dos oportunidades por miembros del sindicato, en circunstancias que se discutía el pliego de reclamos; por esa razón es que –al ser puesto en libertad– despidió a dos dirigentes involucrados en el asunto. Su principal función administrativa era, precisamente, servir de intermediario entre los directivos de la empresa y los 12 sindicatos que conforman la Federación Textil de Tejidos La Unión...²³

23 «Asedio textil, lo que está pasando en Tejidos La Unión». En *Caretas* 1165, Lima, 24 de junio de 1991.

Pero, ¿cuál fue el motivo para asesinar a la ciudadana soviética, Galina Ivanova, encargada de diseño de la misma empresa? Esta es la versión de un dirigente sindical senderista, entrevistado por Carmen Rosa Balbi en 1992.²⁴

Voy a dar un ejemplo concreto: la gerente que mataron en Textil La Unión, una mujer, una rusa. La aniquilaron porque antes, una semana antes un trabajador dirigente clasista había venido siendo hostilizado, adrede, como en todos sitios y luego, como no había producción, detuvieron la producción de la máquina y le dieron trabajos menores, de limpieza, y él barría; hay que pintar, y él pintaba; hay que lavar el baño, y un poco que ya... Él tenía 54 años de edad. Entonces los otros vieron que lo estaban degradando a un técnico, que un ayudante de limpieza podía haber hecho eso. Entonces él se unió con algunos y dijo que no iba a limpiar el baño.

La cuestión era que lo botaban del trabajo, con esta nueva ley. Entonces la cuestión era que se enfrente. Entonces fue a pedir su tarjeta, y pedir permiso para ir al Seguro. Pero como no había limpiado el baño, el gerente de Relaciones Industriales no le dio la tarjeta, y le cerró la puerta.

Tanta fue la impresión que tuvo, que le afectó, le dio una especie de convulsiones al corazón, y salió afuera y se cayó. Dijeron que él se estaba haciendo el mañoso. Veinte minutos después murió. ¿Se merece o no se merece que se le haga justicia a esa mujer? Por eso se le mató.

El informante no parece haber estado en el teatro de los acontecimientos, pues ha condensado en un solo hecho los asesinatos de Joel Podestá (gerente de relaciones industriales) y de Galina Ivanova (directora de diseños). Aún así, su testimonio contiene pasajes interesantes para comprender la opinión que tenía el PCP-SL del sindicalismo y el dilema que enfrentaba frente al conflicto armado interno. En términos generales, él consideraba que «el movimiento obrero no está debilitado. Al contrario, vemos más bien cómo se potencian con beligerancia sus reclamos... el problema es qué línea le aplicas ... para que avance más, o para que lo contengas ... Esa es toda la cuestión».

Sobre los dirigentes sindicales señalaba:

Los mejores cuadros, los hombres que de alguna u otra manera a finales del 60 o del 70 asumieron una posición revolucionaria, en la práctica se han vuelto reformistas, negadores de su propio discurso en los sindicatos, de tal manera que ahora hasta se atornillan en el Parlamento ... Los dirigentes de la CGTP son vende-obreros. Lo demuestran los hechos: juegan con las necesidades de la clase. Tal sindicato en huelga, pliego, solución, por un salario justo. Algo así plantean y esa no es una posición marxista. No podemos exigir un salario justo en un sistema capitalista, porque su ley de ellos te da para que sobrevivas y la ganancia ellos lo van a manejar. Entonces, no podemos pedir un salario justo.

¿Qué hacer, entonces? El entrevistado creía firmemente en la aplicación de los puntos contenidos en el manifiesto del CLOTCCC:

La jornada de trabajo debe ser de ocho horas; hay que estar en contra del sobre tiempo ¿Por qué no planteamos que todos los contratados se sindicalicen? Deben entrar en el sindicato porque el sindicato es una escuela de socialismo. Los sindicalizados somos minoría. Y si no

24 «Habla dirigente senderista». Entrevista de Carmen Rosa Balbi. En *Quehacer* 77. Lima, mayo-junio 1992.

levantamos como bandera aglutinar a esa gran mayoría, entonces no estamos haciendo nada por la clase. Otra cuestión es eso de la jubilación... hay que jubilarse por años de servicio...

Para lograr estos objetivos debían realizar algunas acciones, por ejemplo, los «paros armados», que en su opinión eran más eficaces que los paros convocados por la CGTP, los «paros cívicos»:

Los paros armados son más eficaces. Es algo que te educa. Tú ves quién es tu enemigo. ¿Quiénes son los que convocan a que ataquen a la ciudadanía? Todo el gobierno, pero ¿quiénes salen a las calles a patrullar? ¿No son las fuerzas armadas, las fuerzas reaccionarias las que apalean a los maestros, las que van y nos sacan de las casas de los pueblos jóvenes? Entonces, ese es nuestro enemigo.

Respecto a las tomas de fábricas, hace una importante aclaración:

Eran las formas en que el obrero expresaba ese odio fiero que tiene contra los explotadores. No había otra forma. Pero ahora en esta década tenemos partidos políticos que sí te cubren esas necesidades y tú das el salto del sindicato a ese partido y lo asumes con el costo que requiere. Por eso ahorita una toma de fábrica no corresponde al movimiento obrero; es llevar al inmovilismo a la masa... En el caso de la fábrica COPE hubo un análisis de eso en Carretera Central y los obreros entendemos que se saca lecciones...

De igual manera, los aniquilamientos selectivos, en su opinión, que partían de ciertas consideraciones:

No se aplican indiscriminadamente... eso es porque cubren una necesidad de justicia: como mataron al búfalo Pacheco, como mataron a ese que estafaba a los jubilados, Salaverry... la gente ve en esto una actitud justiciera. En esos casos en que ha habido aniquilamientos de gente de empresas, han sido casos en que ha habido conflictos en que maltrataban... No solamente a ellos: también mataron a Cantoral y a otros dirigentes. Yo me acuerdo de Diamante, en concreto el Diamante es de mi zona, de la avenida Argentina. Pinasco, que es el dueño de Diamante, hizo una defensa de Chiara. Yo creo que cuando me muera, el patrón nunca me va a defender, porque él pertenece a otra clase. Los perros defienden a los perros...

En conclusión, la lucha sindical, como parte de la inevitable revolución, tenía que ser permanente:

Es en la lucha diaria del sindicato que tú vas entendiendo, pues. Por más sensible, mano blanda o guante blanco que use el patrón, siempre hay oportunidad de desenmascararlo, siempre. Stalin decía por ejemplo en las lecciones para el sindicalismo, decía que cuando un dirigente quiere poner en movimiento a la clase, al sindicato, tiene que analizar todos los problemas, y si todos están solucionados, vaya al baño y rompa el vidrio y reclame por el vidrio. Eso es cierto, pues; tú no puedes estar con las aguas quietas, ese inmovilismo hace mucho daño...

Es difícil creer que esta posición concitara la mínima simpatía entre algunos obreros. Sin embargo, así fue, al menos cuando las acciones del PCP-SL parecían encaminadas a ejercer «justicia», allí donde la intransigencia de los empresarios y la inoperatividad del Estado para canalizar e institucionalizar adecuadamente los conflictos, «taponeaba» cualquier posibilidad de

negociar las demandas de los trabajadores. Como confesó una obrera textil de la fábrica BOMOSA, perteneciente al complejo La Unión, cuando mataron a Joel Podestá, gerente de relaciones industriales:

Quando lo mataron hacía meses que no me sentía tan contenta, porque ese gerente era un explotador... Los empresarios creían que los trabajadores eran de Sendero Luminoso y ya nos empezaron a mirar con temor y respeto... Cuando la compañera que estaba vinculada a SL renunció, nos sentimos como huérfanas.

Asimismo, Goyo Moscoso, secretario general de Papelera Atlas y presidente del congreso fundacional del CLOTCC fue enfático al señalar la imposibilidad de cualquier concertación:

¿En qué forma podemos concertar? ¿A más hambre más concertación? ¿A más golpiza del gobierno, más concertación? Creemos que no... Con los empresarios no es posible coincidir, ni para enfrentar la recesión... No, no, no podemos nosotros estar transando con el capitalismo en el sentido de conciliar, de concertar. ¿En qué forma nosotros vamos a concertar?...²⁶

El PCP-SL pudo verse favorecido por otros factores subjetivos, como la admiración que probablemente despertaban ciertas actitudes, y acaso calificadas de «heroicas»; así como la identidad, en la medida que los trabajadores seguían reconociendo que los subversivos podían estar equivocados, pero tenían el mismo origen étnico y clasista.

Vicente Otta manifestaba

En discusiones con compañeros dirigentes obreros de acá, de la carretera Central, ellos me dicen: «bueno pues, los compañeros dan la vida, se la están jugando, hacen la lucha armada ... Si no se hace esto, uno está fregado»; y en segundo lugar, Sendero es el hombre del pueblo, es el trabajador, es el cholo, el mestizo como él ... Entonces, cuando tú no tienes claro que este es un proyecto político, antagónico al tuyo, los lazos sociales de comunidad laboral, de identidad racial son más fuertes y no puedes enfrentarlo. Eso es lo que he encontrado con compañeros dirigentes.²⁷

Esta ausencia de claridad y fuerza para deslindar con un proyecto que significaba la destrucción de los sindicatos, tuvo profundas consecuencias no sólo por lo que correspondía a su debilitamiento y a su creciente incapacidad de negociación, sino también por la confusa posición de los trabajadores sobre el origen de las agresiones que sufrían. Al asumir que los senderistas, por muy equivocados que estuviesen, eran parte de ellos, les fue muy difícil interiorizar la opción del crimen contra aquellos que se oponían a sus planes. Por ese motivo, asesinatos como el de Enrique Castilla siempre estuvieron rodeados de dudas sobre sus verdaderos autores. Lo más sorprendente es que implícitamente se aceptaba la violencia.

25 Balbi, *idem*.

26 Balbi, *idem*.

27 Vicente Otta: «violencia y movimiento sindical». En Denis Sulmont y otros: *Violencia y movimiento sindical*. Red Peruana de Educación Popular y Sindicalismo. Lima, 1989.

2.15.5. Conclusiones

La violencia en el ámbito sindical no fue un factor circunscrito al periodo del conflicto armado interno. En términos generales, siempre estuvo presente y fue un componente importante en la vida de los organismos sindicales y en las relaciones que mantenían con las empresas y el Estado. La cultura radical que ellos generaron puede explicarse por su vinculación con los partidos de izquierda, pero otros factores también contribuyeron como el comportamiento autoritario del empresariado, verticalista y excluyente frente a las decisiones adoptadas en el proceso productivo.

A su vez, el Estado no sólo fue ineficaz en su papel de mediador en los conflictos laborales sino que, muchas veces, dado el desorden imperante en la administración pública, el alto grado de corrupción y la ausencia de un mínimo criterio organizativo, fomentó aún más el desacuerdo y las actitudes extremas.

A pesar de esta dimensión estructural, debe reconocerse sin duda alguna que la violencia impulsada por la subversión adquirió contornos nunca antes visto: el asesinato sistemático de dirigentes y funcionarios de las empresas, la convocatoria de «paros armados», las virulentas tomas de fábricas, eran expresiones inéditas que desbordaban la tradición radical enraizada desde los 70. Algunos analistas señalan que la estrategia del PCP-SL fue introducir en los sindicatos la «lógica de la guerra», rezagando cualquier otra demanda reivindicativa o subordinándola para alimentar los objetivos políticos de la «guerra popular». El resultado fue catastrófico e incluso allí donde el PCP-SL no logró imponer una presencia significativa los trabajadores se vieron envueltos en situaciones extremas sin obtener a cambio ningún tipo de beneficio.

Por otro lado, la violencia no era una variable desconocida en la relación empresas-sindicatos, ni siquiera en su expresión más extrema (los asesinatos). La probable actuación de grupos irregulares, los mecanismos de información así como prácticas de intimidación, que en su momento no fueron investigadas, son materias pendientes y surge la necesidad de conocer este recurso antidemocrático desde el lado de los propietarios. No es un secreto que muchas de estas actividades intimidatorias fueron realizadas mediante organismos de seguridad privada. La ausencia y la falta de efectividad del Estado para proveer la necesaria seguridad a las unidades productivas, fue cubierta por este sistema, así como ocurrió en las minas donde ante la presencia subversiva se respondió con el retiro paulatino de las unidades policiales. Por eso se impone también la necesidad de conocer exactamente cuáles fueron las actividades desarrolladas por la seguridad privada.

Finalmente, no puede excluirse al Estado, y no nos referimos a su legítimo derecho de recurrir a la violencia para defender el país contra la subversión, sino a la actuación parcializada de sus agentes o a su incapacidad de encontrar fórmulas eficaces que canalizaran y resolvieran adecuadamente los conflictos laborales. Estos factores legitimarían el supuesto de los trabajadores, según el cual el Estado, a través de mecanismos legales, hacía recaer sobre sus hombros el peso de la crisis económica o reducía sus posibilidades de beneficios en los periodos de recuperación.

La formalización de las relaciones laborales, bajo un marco de fomento institucional democrático, con reglas claras y generadoras de obligaciones entre las partes comprometidas, está por construirse y deviene en indispensable para no correr el peligro de que vuelvan a expresarse tendencias extremas y opuestas a la negociación y al diálogo.